



## JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA

Montería, cuatro (4) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

### FALLO DE TUTELA

<b>ACCIÓN:</b>	Tutela
<b>EXPEDIENTE No:</b>	23 001 33 33 005 <b>2025 00372 00</b>
<b>ACCIONANTE:</b>	Heber Andrés Martínez Romero
<b>ACCIONADO:</b>	Registraduría Nacional del Estado Civil
<b>VINCULADO:</b>	Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A

El Despacho procede a proferir fallo de primera instancia en la acción de tutela presentada por el señor Heber Andrés Martínez Romero contra la Registraduría Nacional del Estado Civil conforme los siguientes:

### I. ANTECEDENTES

**1.1 Hechos<sup>1</sup>.** En el escrito de tutela se expusieron los siguientes hechos:

El señor Heber Andrés Martínez Romero manifiesta que el día 12 de mayo de 2025, mediante apoderado, presentó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, petición solicitando la modificación póstuma de la fecha de nacimiento de la cedula de ciudadanía de su padre fallecido, el señor Heber Antonio Martínez Marzola. Señala que, la solicitud se fundamenta en una inconsistencia entre la fecha registrada en la cedula de ciudadanía y la que aparece en el registro civil de nacimiento, lo cual ha impedido adelantar los trámites ante el fondo de pensiones donde el causante tenía sus ahorros pensionales, ya que la entidad exige que se subsane dicha inconsistencia documental.

Así mismo, el accionante señala que han transcurrido más de cinco meses desde la presentación de la petición sin que la Registraduría haya emitido una respuesta de fondo, a su solicitud. Aclara que, no solicita que se apruebe o niegue directamente la modificación, sino que se le indique qué trámite adicional debe adelantar para resolver la situación.

Finalmente, señala que el tiempo transcurrido excede ampliamente el plazo legal de quince (15) días hábiles para responder este tipo de solicitudes, lo que configura una omisión injustificada por parte de la entidad accionada.

**1.2 Peticiones<sup>2</sup>.** En el libelo de acción de tutela la accionante solicita la siguiente petición:

**a).** Que se ampare su derecho fundamental de petición dándose oportuna respuesta a su solicitud.

**1.3 Derechos fundamentales alegados como vulnerados.**

En atención de los hechos narrados en el libelo de tutela, se advierte que la accionante alega como vulnerado su derecho fundamental de petición.

### II. TRAMITE DE LA PRESENTE ACCIÓN

#### 2.1 Admisión de la acción de tutela

La presente acción de tutela fue presentada el 20 de octubre de 2025<sup>3</sup>, correspondiéndole por reparto a esta Unidad Judicial, por tanto, fue admitida mediante providencia de la misma fecha<sup>4</sup>, mediante la cual se ordenó la comunicación respectiva para que la entidad accionada y

<sup>1</sup> PDF No. 01 (Págs. 1) del expediente digital.

<sup>2</sup> PDF No. 01 (Pág. 2) del expediente digital.

<sup>3</sup> PDF No. 03 del expediente digital.

<sup>4</sup> PDF No. 06 del expediente digital.

vinculada ejercieran su derecho de defensa y contradicción. Además, en esa misma providencia se decretaron varias pruebas.

## 2.2 Informes

- **Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías y del Componente Complementario de Ahorro Individual PORVENIR S.A**

La citada entidad vinculada a través de informe rendido el 23 de octubre de 2025<sup>5</sup>, indicó que el señor Heber Antonio Martínez Marzola (Q.E.P.D.) suscribió el formulario de solicitud de vinculación al Fondo de Pensiones Obligatorias administrado por Porvenir S.A.

Asimismo, señaló que el señor Heber Andrés Martínez Romero no ha radicado la documentación necesaria para realizar un estudio pensional y así determinar la prestación que en derecho corresponde. Además, sostuvo que, revisados los sistemas de información, no se encontró que el accionante haya radicado los documentos requeridos para crear un expediente pensional que permita realizar el estudio, la investigación administrativa y la publicación de edictos.

En ese orden, señaló que los documentos básicos de identificación, como lo son la cédula de ciudadanía y el registro civil de nacimiento, son los únicos que permiten establecer la identidad y edad de una persona, lo cual a su vez permite mitigar eventuales casos de suplantación. Por tanto, al presentar inconsistencias, dichos documentos deben ser corregidos por la autoridad competente, en este caso, la Registraduría Nacional del Estado Civil.

De igual manera, indicó que la fecha de nacimiento del señor Heber Antonio Martínez Marzola (Q.E.P.D.), consignada en el registro civil de nacimiento, es el 29 de agosto de 1974, mientras que la fecha registrada en la cédula de ciudadanía es el 29 de agosto de 1973.

Finalmente, solicitó que se deniegue por improcedente la pretendida acción de tutela respecto de Porvenir S.A., dado que dicha entidad es ajena a cualquier vulneración o amenaza de los derechos citados por el accionante.

- **Registraduría Nacional del Estado Civil**

La citada entidad mediante informe rendido el 24 de octubre de 2025<sup>6</sup>, indicó que una vez consultada la base de datos con el nombre de Heber Antonio Martínez Marzola y NUIP nro.. 78.715.531, se encontró que en el Sistema de Información de Registro CIVIL (SIRC) registra como fecha de nacimiento 29 de agosto de 1974, y en el Archivo Nacional de Identificación (ANI) registra fecha de nacimiento 29 de agosto de 1973.

En ese mismo orden, señaló que, el Grupo Jurídico de Identificación, realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución No. 5621 de 2019, y mediante Auto se dio apertura de la actuación administrativa tendiente a la corrección póstuma de la cédula de ciudadanía No. 78.715.531 a nombre de Heber Antonio Martínez Marzola, con el fin de corregir el año de nacimiento del titular, siendo lo correcto «29 de agosto de 1974», el cual fue notificado al correo electrónico «[andres1996anfeal@hotmail.com](mailto:andres1996anfeal@hotmail.com)».

De igual forma, aclaró que a la solicitud presentada en el mes de mayo se le dio oportuna respuesta, indicando los documentos que debían aportarse para que procediera, por vía administrativa, la corrección solicitada. Dichos documentos fueron allegados dentro de los términos establecidos; sin embargo, a la fecha aún se encontraban en estudio, previa elaboración del auto que da apertura a la actuación administrativa.

Finalmente, solicitó negar la presente acción constitucional en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, toda vez que no ha vulnerado derecho fundamental alguno.

## III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

### 3.1 Problema jurídico

<sup>5</sup> PDF No. 08 del expediente digital.

<sup>6</sup> PDF No. 09 del expediente digital.

Atendiendo lo manifestado en el libelo de tutela y el informe rendido por la entidad accionada y la vinculada, al Despacho le corresponde determinar si en el presente asunto la entidad accionada está vulnerando a la accionante su derecho fundamental de petición.

Con el fin de resolver el anterior planteamiento, el Despacho estudiará los siguientes aspectos: (a) generalidades de la acción de tutela; (b) los lineamientos normativos sobre el derecho fundamental de petición; y (c) del procedimiento interno para la corrección póstuma de datos contenidos en la cedula de ciudadanía.

#### a). Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y fue creada para proteger los Derechos Constitucionales Fundamentales de las personas, cuando éstos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello, se puede afirmar que tiene el carácter de residual o subsidiario, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

#### b) Lineamientos normativos del derecho fundamental de petición

El derecho fundamental de **petición**, la Constitución Política en su artículo 23 establece que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. En armonía con ello, en los artículos 13 a 23 de la Ley 1437 de 2011 *-sustituidos por la Ley 1755 de 2015-* se indica que, salvo norma especial, las peticiones deberán responderse dentro de los **15 días siguientes a su recepción**. Así mismo, en cuanto a algunas peticiones en particular, precisó lo siguiente: **(i)** peticiones de documentos y de información: dentro de los **10 días** siguientes a su recepción, con la consecuencia que, de no atenderse la petición dentro del término, la entidad no podrá negar la entrega de los documentos peticionados y deberá entregar las copias dentro de los tres (3) días siguientes al interesado; y **(ii)** Peticiones a través de los cuales se eleva una consulta a las autoridades: dentro de los **30 días** siguientes a su recepción.

El párrafo del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 también señaló que: *«Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto»*.

En ese mismo orden, con relación al núcleo esencial de este derecho, la Corte Constitucional<sup>7</sup> ha determinado que se circunscribe a la formulación de la petición, a la pronta resolución, a la existencia de una respuesta de fondo y a la notificación de la decisión al peticionario.

En ese mismo sentido, la Corte Constitucional en Sentencia C-007 de 2017, reiterada en la sentencia T-044 de 2019, indicó que la respuesta a la petición debe cumplir con las siguientes características para que se considere que se encuentra satisfecha el derecho fundamental bajo estudio: *«(i) Prontitud. Que se traduce en la obligación de la persona a quien se dirige la comunicación de darle contestación en el menor tiempo posible, sin que exceda los términos fijados por la Ley 1755 de 2014. En aras de fortalecer esta garantía el Legislador previó que la ausencia de respuesta puede dar lugar a “falta para el servidor público y (...) a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario.” (ii) Resolver de fondo la solicitud. Ello implica que es necesario que sea clara, es decir, inteligible y de fácil comprensión ciudadana; precisa de modo que atienda lo solicitado y excluya información impertinente, para evitar respuestas evasivas o elusivas; congruente, o que se encuentre conforme a lo solicitado de modo que lo atienda en su totalidad; y consecuente con el trámite que la origina, cuando es el caso en que se enmarca en un proceso administrativo o una actuación en curso, caso en cual no puede concebirse como una petición aislada. (iii) Notificación. No basta con la emisión de la respuesta, sino que la misma debe ser puesta en conocimiento del interesado y, ante el juez de tutela. Ello debe ser acreditado»*.

#### c) Del procedimiento interno para la corrección póstuma de datos contenidos en la

<sup>7</sup> Ver, entre otras, las Sentencias T-230 de 2020; T-202 de 2022 y T-051 de 2023.

**cedula de ciudadanía.**

En cuanto al trámite interno para la corrección póstuma de datos contenidos en la cedula de ciudadanía, este se encuentra regulado en la Resolución nro. 5621 de 4 de junio de 2019 -*por medio del cual se adopta el procedimiento interno para la corrección póstuma de datos contenidos en la cédula de ciudadanía, en el Archivo Nacional de Identificación (ANI) a solicitud de causahabientes*-, la cual define en su artículo 2.º numeral a) la corrección póstuma como el procedimiento mediante el cual se actualizan los datos biográficos en la base de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI), cuando la cédula de ciudadanía correspondiente se encuentra registrada como cancelada por fallecimiento. Así, textualmente el citado artículo dispone lo siguiente:

**«Artículo 2º.** Con el fin de adelantar el procedimiento administrativo, se precisan los siguientes términos y principios que regirán la actuación administrativa:

**a. Corrección Póstuma:** Es la corrección que se efectúa en la base de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI), de los datos biográficos (nombres, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, fecha de expedición, componente sexo y RH) de una cédula de ciudadanía que se encuentra en estado de cancelado por muerte.

**b. Documento Base:** Es el documento utilizado para el trámite de primera vez de la cédula de ciudadanía, que puede ser: partida de bautismo, formulario 12 b, libreta militar, tarjeta de identidad, tarjeta de identidad postal, cédula antigua, registro civil de matrimonio, registro civil de nacimiento, carta de naturaleza, entre otros.

**c. Principios orientadores:** La Entidad adelantará el procedimiento bajo los principios de la función administrativa, entre los cuales se encuentra, que las actuaciones de los particulares ante las autoridades públicas se presumen de buena fe, de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Nacional.

**d. Principio de corresponsabilidad:** Las Delegaciones Departamentales, Registradurías Especiales, Municipales, Auxiliares y demás servidores públicos de la Entidad deberán prestar colaboración eficiente y oportuna a la Dirección Nacional de Identificación para la debida notificación a los ciudadanos y demás requerimientos que sean necesarios para dar cumplimiento integral a la presente resolución.»

De igual forma, la citada Resolución nro. 5621 de 4 de junio de 2019, en sus artículos 8.º y 9.º, disponen los instrumentos y requisitos estandarizados para la petición de corrección póstuma, la cual deberá contener, entre otras cosas, la designación de la autoridad a la que se dirige, los nombres y apellidos completos del solicitante, la dirección de correo electrónico, el objeto, las razones y la firma del peticionario. Así textualmente el citado artículo dispone lo siguiente:

**«Artículo 8º.** Contenido de la petición de la corrección póstuma: La Dirección Nacional de Identificación diseñará los formularios de derechos de petición de corrección póstuma para facilitar su diligenciamiento, los cuales deberán contener:

1. La designación de la autoridad a la que se dirige.
2. Nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado, si es el caso, con indicación del documento de identidad, dirección donde recibirá respuesta. 3. Número de fax o dirección de correo electrónico si el peticionario así lo considera.
4. Objeto de la petición e interés jurídico en los términos del artículo séptimo del presente acto administrativo.
5. Razones en que fundamenta la petición y si conoce de la existencia de proceso judicial o de otra índole en el que esté relacionada la situación de identidad de la persona fallecida, caso en el cual se solicitará que se aporte copia del fallo proferido con la constancia de “notificación y ejecutoria”, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 del C. G. del P.
6. Relación de los requisitos exigidos por la ley y de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite, si es el caso.
7. Firma del peticionario.

**Parágrafo 1º.** Las peticiones se deberán examinar integralmente y en ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente y que no sean necesarios para resolverla, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 1755 de 2015 parágrafo 2º. Si la petición se efectúa a través de poder, este debe cumplir los requisitos de ley. No obstante, en caso que el poder sea especial, debe ser dirigido a la Registraduría Nacional del Estado Civil, autenticado específicamente para adelantar la actuación administrativa de corrección póstuma de cédula de ciudadanía.

**Artículo 9º.** La petición deberá cumplir con todos los requisitos descritos en el presente procedimiento, de lo contrario se deberá dar aplicación al procedimiento establecido en los artículos 17 y siguientes de la Ley 1755 de 2015.»

En consonancia con lo anterior, el artículo 10º de la citada resolución dispone que cuando sea recibida la documentación que cumpla con los requisitos exigidos por la ley, la Dirección Nacional de Identificación procederá a expedir las respectivas actuaciones administrativas con el fin de darle solución a la solicitud de corrección póstuma. En ese sentido, el citado artículo textualmente dispone lo siguiente:

**«Artículo 10.** Una vez recibida la documentación que cumpla con lo establecido en el artículo anterior, la Dirección Nacional de Identificación procederá de la siguiente manera:



1. Se expedirá el Auto por medio del cual se inicia actuación administrativa, **dentro de los cinco (5) días siguientes a la radicación de la petición.**

2. Cuando se advierta que terceras personas puedan resultar directamente afectadas con la actuación administrativa, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, para que dentro del término de cinco (5) días puedan hacerse parte del proceso.

3. Una vez se cumpla con los términos establecidos en los numerales anteriores, se decidirá conforme los documentos que reposen en el expediente.

4. El acto administrativo que decide de fondo la petición se notificará de la forma establecida en los artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo: Las peticiones presentadas referentes a la corrección póstuma, serán centralizadas y tramitadas en la Coordinación de Archivos de Identificación de la Dirección Nacional de Identificación.

Así mismo, será la responsable de dar cumplimiento al acto administrativo, una vez en firme, y llevar el archivo de los expedientes.» (Negrilla subrayada fuera de texto)

### 3.2 Caso concreto

En el presente caso el accionante solicita se ampare su derecho fundamental de petición alegando que la entidad accionada no le ha dado respuesta a la petición que presentó mediante apoderado el 12 de mayo de 2025.

En atención de ello, el Despacho procede a verificar los presupuestos generales de procedencia de toda tutela, estos son: **(i)** legitimación en la causa por pasiva y por activa, **(ii)** inmediatez y **(iii)** subsidiariedad.

#### **(i). Legitimación en la causa por pasiva y por activa**

Siendo así, se tiene que, en el asunto bajo examen, la acción tutela fue presentada por el señor Heber Andrés Martínez Romero quien presentó petición mediante apoderado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el 12 de mayo de 2025, por tanto, es el titular del derecho fundamental de petición que se señala como vulnerado. De esta manera, el Despacho advierte que en el presente caso está acreditada la **legitimación en la causa por activa**.

Por su parte, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela «se dirigirá contra la autoridad pública o el representante de la entidad, que presuntamente vulneró o amenazó los derechos fundamentales». En ese mismo sentido, en el presente caso también se encuentra acreditada la **legitimación en la causa por pasiva**, pues, la acción de tutela de la referencia se encuentra dirigida contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, ante la cual el accionante a través de apoderado elevó la petición, por lo tanto, es la que se señala de violar el derecho fundamental de petición del accionante, sumado a ello, se vinculó a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A, dado que le podría asistir un interés en las resultas de la presente acción constitucional.

#### **(ii). Inmediatez**

La Corte Constitucional<sup>8</sup>, en cuanto al requisito de la «inmediatez», ha sostenido que la acción de tutela se debe interponer en un tiempo oportuno, a partir del momento en que ocurre la situación que presuntamente vulnera o amenaza el derecho fundamental, en tanto dicha acción de amparo es un mecanismo de protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales. En ese sentido, el Despacho señala que en este caso se alega la vulneración del derecho fundamental de petición, por lo que debe ponerse de presente que, al verificarse el precitado requisito, debe considerarse que, de no responder a la petición de la accionante, más se agrava la vulneración del mentado derecho, por lo que el estudio de inmediatez se realice de forma diferente a otros derechos.

En consonancia con ello, se advierte que, en el presente asunto el motivo que generó la interposición de la acción de tutela fue la falta de respuesta a la petición que el señor Heber Andrés Martínez Romero presentó a través de apoderado el día 12 de mayo de 2025<sup>9</sup>, a la accionada. Así entonces, dado que la acción de tutela en el presente asunto fue interpuesta el 20 de octubre de 2025<sup>10</sup>, el Despacho considera que fue presentada dentro de un término razonable, pues, entre la fecha en que se realizó la petición por parte del accionante y la interposición de la acción de tutela objeto de estudio sólo han transcurrido un poco más de cinco (5) meses, y ocho (8) días. Así entonces, en el presente caso se encuentra satisfecho este requisito.

<sup>8</sup> Sentencia T-250 de 2022, M. P. José Fernando Reyes Cuartas, Bogotá, D. C., 5 de julio de 2022.

<sup>9</sup> PDF No. 01 (pág. 4) del expediente digital.

<sup>10</sup> PDF No. 03 del expediente digital.

(iii). Subsidiariedad

En el presente caso el requisito de «subsidiariedad» se encuentra satisfecho, debido a que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 constitucional y a los criterios establecidos por la Corte Constitucional, la acción de tutela es el mecanismo de defensa idóneo y eficaz para el amparo del derecho fundamental de petición dado que es exigible de manera inmediata y no cuenta con otro mecanismo distinto de la acción de tutela para su protección<sup>11</sup> particularmente tratándose de una víctima del conflicto armado pues, como ha advertido la Corte Constitucional la tutela es el medio idóneo y eficaz para exigir la garantía de los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto<sup>12</sup>; por tanto, resulta procedente, al no existir otro medio de defensa judicial, cumpliéndose así el criterio de subsidiariedad.

• Consideraciones del caso concreto

Anotado lo anterior, comoquiera que en este caso se cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela, se procede a resolver el problema jurídico planteado. Así, conforme los documentos que obran en el expediente, en el presente asunto se encuentra acreditado lo siguiente:

- Cedula de ciudadanía del señor Heber Andrés Martínez Romero<sup>13</sup> el cual da cuenta que tiene 27 años.
- El señor Heber Andrés Martínez Romero, el día 12 de mayo de 2025<sup>14</sup>, presentó por intermedio de apoderado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, una solicitud de corrección póstuma respecto de su finado padre, señor Heber Antonio Martínez Marzola, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 78.715.531. Dicha petición fue recibida bajo el número de radicado «2025000288».
- El Director Nacional de Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el 23 de octubre de 2025<sup>15</sup>, emitió y notificó al accionante el Auto No. 244 del 23 de octubre de 2025, –por el cual se inicia actuación administrativa tendiente a resolver una solicitud de corrección póstuma de datos en una cedula de ciudadanía- conforme la cual en su parte resolutive dispuso lo siguiente:

«**PRIMERO: INICIAR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA** tendiente a resolver la solicitud de corrección póstuma de los datos contenidos en la cédula de ciudadanía No. **78.715.531** en el Archivo Nacional de Identificación (ANI) a nombre de **HEBER ANTONIO MARTINEZ MARZOLA**, en cuanto a corregir la fecha de nacimiento del titular como se relaciona a continuación:

CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRE Y APELLIDOS EN ANI	FECHA DE NACIMIENTO EN ANI	FECHA DE NACIMIENTO CORRECTA
78.715.531	HEBER ANTONIO MARTINEZ MARZOLA	29 de agosto de 1973	29 de agosto de 1974

**SEGUNDO: PUBLICAR** el presente auto en la página institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que las personas que consideren tener interés legítimo en la presente actuación administrativa puedan hacerse parte del proceso, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del presente auto, conforme a los artículos 37 y 69 de la ley 1437 del 2011.»

- Correo electrónico de fecha 23 de octubre de 2025<sup>16</sup>, emitido por el Profesional Universitario dirigido al señor Andrés Felipe Álvarez Hernández, conforme la cual se desprende en el asunto «Notificación Auto 244 de 2025». Correo electrónico en el que le indican lo siguiente:

«La Registraduría Nacional del Estado Civil a través de la Coordinación Grupo Jurídico de la Dirección Nacional de Identificación, se permite adjuntar copia del Auto No. 244 de 2025, “Por el cual se inicia actuación administrativa tendiente a resolver solicitud de corrección póstuma de datos en una cédula de ciudadanía”, el cual será fijado por el término de cinco (5) días en la Página Oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, contados a partir del día 23 de octubre de 2025, y podrá ser

<sup>11</sup> Sentencia T- 159 de 2023, M.P: José Fernando Reyes Cuartas, Bogotá, D.C., 16 de mayo 2023  
<sup>12</sup> Corte Constitucional T-377 de 2022  
<sup>13</sup> PDF No. 01 (pág. 5) del expediente digital.  
<sup>14</sup> PDF No. 01 (pág. 4) del expediente digital.  
<sup>15</sup> PDF No. 09 (págs. 9 a 13) del expediente digital.  
<sup>16</sup> PDF No. 09 (págs. 9 y 10) del expediente digital.

consultado en el siguiente link: <https://wsp.registraduria.gov.co/publicaciones/notificaciones.php>

Lo anterior, de conformidad con el artículo 37 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), los cuales establecen:

**“ARTÍCULO 37. Deber de comunicar las actuaciones administrativas a terceros.** Cuando en una actuación administrativa de contenido particular y concreto la autoridad advierta que terceras personas puedan resultar directamente afectadas por la decisión, les comunicará la existencia de la actuación, el objeto de la misma y el nombre del peticionario, si lo hubiere, para que puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos...”

**ARTÍCULO 69. Notificación por aviso.** Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañando copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

Quando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal.”

Una vez culminado el término establecido, se desfijará el mismo y se procederá a decidir de fondo a lo peticionado por la parte interesada, de conformidad con lo dispuesto en Resolución No. 5621 de 2019.

Finalmente se informa que, lo resuelto por la Registraduría Nacional del Estado Civil a través de la Coordinación Grupo Jurídico de la Dirección Nacional de Identificación, le será notificado, en aras de dar cumplimiento al artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), el cual dispone:

**“Artículo 56. Notificación electrónica.** Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación. Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título. La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración”.»

Pues bien, en cuanto al problema jurídico planteado consistente en *-determinar si en el presente asunto la entidad accionada está vulnerando al accionante su derecho fundamental de petición-*, el Despacho observa que, conforme los lineamientos previstos en el marco normativo y jurisprudencial de esta providencia, en el presente caso se está ante la vulneración de los derechos fundamentales de petición y al debido proceso *-si bien el accionante no alega la vulneración de dicho derecho, dada las facultades oficiosas del Juez de tutela, el Despacho procederá a pronunciarse sobre la vulneración del mentado derecho fundamental-*.

En ese orden, la anterior postura guarda sustento en que, en el expediente se encuentra acreditado que la parte accionante mediante apoderado presentó petición el 12 de mayo de 2025, con el fin de lograr la modificación póstuma de la cedula de ciudadanía de su finado padre el señor Heber Antonio Martínez Marzola; no obstante, la Registraduría Nacional del Estado Civil con su informe allego prueba de que expidió y notificó al accionante el Auto nro. 244 del 23 de octubre de 2025 *-por el cual se inicia actuación administrativa tendiente a resolver una solicitud de corrección póstuma de datos en una cedula de ciudadanía*, y, así mismo, le indicó que será fijado por el termino de 5 días en la página oficial de la registraduría Nacional del Estado Civil.

En ese contexto, pese a que la entidad accionada informó que sería fijado por el termino de 5 días en la página oficial de la registraduría Nacional del Estado Civil el Auto nro. 244 del 23 de octubre de 2025, en el expediente no reposa prueba de que se haya realizado tal publicación. En efecto, conforme a los lineamientos previstos en el marco normativo y jurisprudencial de esta providencia, los plazos con el que cuenta la Registraduría Nacional del Estado Civil para resolver una solicitud de corrección póstuma de cédula de ciudadanía corresponden a los siguientes: (i) se expedirá el Auto por medio del cual se inicia actuación administrativa, dentro de los cinco (5) días siguientes a la radicación de la petición, (ii) cuando se advierta que terceras personas puedan resultar directamente afectadas con la actuación administrativa, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, para que dentro del término de cinco (5) días puedan hacerse parte del proceso. y (iii) una vez se cumpla con los términos establecidos en los numerales anteriores, se decidirá conforme los documentos que reposen en el expediente. En ese sentido, dicho término, en el presente caso, se encuentra ampliamente vencido, toda vez que la solicitud de corrección póstuma fue presentada el 12 de

mayo de 2025, y no se han realizado todas las actuaciones administrativas con el fin de decidir de fondo la mentada solicitud.

En ese orden, de conformidad con lo estipulado en el artículo 10 de la Resolución nro. 5621 de 4 de junio de 2019, cuando se advierta que terceras personas puedan resultar directamente afectadas con la actuación administrativa, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, para que dentro del término de cinco (5) días puedan hacerse parte del proceso, y una vez se encuentren vencidos los términos correspondientes se decidirá la solicitud conforme los documentos que reposen en el expediente y finalmente se procederá a expedir el acto administrativo que decide de fondo la petición que será notificada al peticionario. Así, en cuanto al procedimiento administrativo el artículo citado textualmente señala lo siguiente:

*«Artículo 10. Una vez recibida la documentación que cumpla con lo establecido en el artículo anterior, la Dirección Nacional de Identificación procederá de la siguiente manera:*

*1. Se expedirá el Auto por medio del cual se inicia actuación administrativa, dentro de los cinco (5) días siguientes a la radicación de la petición.*

*2. Cuando se advierta que terceras personas puedan resultar directamente afectadas con la actuación administrativa, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, para que dentro del término de cinco (5) días puedan hacerse parte del proceso.*

*3. Una vez se cumpla con los términos establecidos en los numerales anteriores, se decidirá conforme los documentos que reposen en el expediente.*

*4. El acto administrativo que decide de fondo la petición se notificará de la forma establecida en los artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. [...]*» (Negrilla subrayada fuera de texto)

Así entonces, el Despacho advierte que verificado la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, no se observó que el Auto nro. 244 del 23 de octubre de 2025 -que inició la actuación administrativa en este caso- haya sido publicada tal como lo señala el artículo 10 de la mentada resolución, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.º del citado auto, por lo que tal omisión deriva en la afectación de los derechos fundamentales de petición y al debido proceso del accionante. Al respecto, el numeral 2.º del Auto nro. 244 de 23 de octubre de 2025, establece:

*«**SEGUNDO: PUBLICAR el presente auto en la página institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil,** para que las personas que consideren tener interés legítimo en la presente actuación administrativa puedan hacerse parte del proceso, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del presente auto, conforme a los artículos 37 y 69 de la ley 1437 del 2011.»* (Negrilla subrayada fuera de texto)

Siendo así, en atención de las circunstancias previamente señaladas en esta providencia, se procederán a amparar los derechos fundamentales de petición y debido proceso del señor Heber Andrés Martínez Romero, y, como consecuencia de lo anterior, se ordenará a la Registraduría Nacional del Estado Civil lo siguiente: **(a)** dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, siguiente a la notificación de la presente providencia, **proceda** publicar en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil el Auto nro. 244 de 23 de octubre de 2025, por medio del cual se inició la actuación administrativa tendiente a resolver la solicitud de corrección póstuma de los datos contenidos en la cédula de ciudadanía No. 78.715.531 en el Archivo Nacional de Identificación (ANI) a nombre de Heber Antonio Martínez Marzola, para que las personas que consideren tener interés legítimo en la citada actuación administrativa puedan hacerse parte del proceso, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación; y **(b)** una vez vencido el termino de cinco (5) días de que trata el literal anterior, proceder a emitir el acto administrativo que decide de fondo la petición presentada por el accionante Heber Andrés Martínez Romero a través de apoderado el día 12 de mayo de 2025, y, así mismo, proceda a notificar dicho acto al accionante.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito de Montería, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

### FALLA

**PRIMERO: AMPARAR** los derechos fundamentales de petición y al debido proceso del señor **Heber Andrés Martínez Romero**, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

**SEGUNDO: ORDENAR** a la **Registraduría Nacional del Estado Civil** lo siguiente:



**a).** Dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, siguiente a la notificación de la presente providencia, **publicar** en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil el Auto nro. 244 de 23 de octubre de 2025, por medio del cual se inició la actuación administrativa tendiente a resolver la solicitud de corrección póstuma de los datos contenidos en la cédula de ciudadanía No. 78.715.531 en el Archivo Nacional de Identificación (ANI) a nombre de Heber Antonio Martínez Marzola, para que las personas que consideren tener interés legítimo en la citada actuación administrativa puedan hacerse parte del proceso, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación.

**b).** Una vez vencido el termino de cinco (5) días de que trata el literal anterior, **emitir** el acto administrativo que decida de fondo la petición presentada por el accionante Heber Andrés Martínez Romero a través de apoderado el día 12 de mayo de 2025, y, así mismo, **notificar** dicho acto al accionante.

**TERCERO: COMUNICAR** el presente fallo a las partes y al agente del Ministerio Público que actúa ante este despacho judicial, a través del medio más expedito posible.

**CUARTO:** En firme esta sentencia, por secretaría, **REMITIR** a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo indican los artículos 86 de la Constitución Política y 31 del Decreto 2591 de 1991. En caso de que la presente providencia fuere excluida de revisión constitucional, archívese el expediente.

**QUINTO:** Las comunicaciones, oficios, memoriales, escritos, recursos, contestaciones y demás, con ocasión de la presente decisión judicial, se reciben en la siguiente cuenta de correo electrónico: [adm05mon@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:adm05mon@cendoj.ramajudicial.gov.co).

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



**ELÍAS SAMUEL PITALUA ENAMORADO**  
Juez